

Bogotá D.C.

Secretaría General de Organismo de Control
LUZ ANGÉLICA VIZCAÍNO SOLANO
CONCEJO DE BOGOTÁ
secretariageneral@concejobogota.gov.co
CL 36 No. 28 A - 41
208 82 10

CONCEJO DE BOGOTÁ 21-04-2025 09:13:35
2025ER10307 O 1 Fol:1 Anex:0
ORIGEN: SECRETARIA DE AMBIENTE/CLAUDIA PATRICIA GALVIS SANCHI
DESTINO: SECRETARIA GENERAL/VIZCAINO SOLANO LUZ ANGELICA
ASUNTO: RESPUESTA PROPOSICION N° 464 DE 2025
OBS: —

Asunto: Respuesta Proposición 464 de 2025
Radicación SDA 2025ER70788 del 03/04/2025
Citante: JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO

Respetada Secretaria.

En el marco de las atribuciones conferidas a esta Autoridad Ambiental y en cumplimiento de los términos establecidos en el Reglamento Interno del Concejo; de manera atenta se da respuesta a los interrogantes 1, 5 y 7 de competencia de la Entidad dentro de la **Proposición 464 de 2025**, relacionada con el tema **“ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE LA SABANA DE BOGOTÁ Y CRISIS POR ESCASEZ DE AGUA”**

1. ¿Cómo ha avanzado Bogotá en la reglamentación del artículo 61 de la Ley 99 de 1993?

El artículo 61 de la Ley 99 de 1993, señala de manera expresa:

*“**Artículo 61.** Declárase la Sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos como de interés ecológico nacional, cuya destinación prioritaria será la agropecuaria y forestal.*

El Ministerio del Medio Ambiente determinará las zonas en las cuales exista compatibilidad con las explotaciones mineras, con base en esta determinación, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), otorgará o negará las correspondientes licencias ambientales”.

“Los municipios y el Distrito Capital, expedirán la reglamentación de los usos del suelo, teniendo en cuenta las disposiciones de que trata este artículo y las que a nivel nacional expida el Ministerio del Medio Ambiente.”

Lo primero que debe señalarse es que este artículo no se refiere únicamente al Distrito Capital, sino que abarca también todos los municipios que conforman la Sabana de Bogotá. Por lo tanto, las respuestas a la proposición deben circunscribirse a esta jurisdicción.

En este sentido, es importante resaltar que tanto el artículo como, en especial, su inciso final, fueron objeto de control constitucional mediante la Sentencia C-534 de 1996. En dicha sentencia, la Corte realiza una serie de reflexiones relevantes sobre el alcance de la potestad regulatoria del Estado en

materia de ordenamiento territorial, que resulta pertinente traer a colación como contexto acerca de su alcance.

Adicionalmente, señala la Corte frente a los principios de unidad y autonomía lo siguiente:

“La vigencia paralela de los principios de unidad y autonomía exige entonces su realización armónica, no excluyente, que permita afirmar los intereses locales dentro del marco que delimita el ordenamiento superior, pues solo así se logrará el equilibrio requerido para, preservando el principio unitario que se consagró en la Carta Política como pilar fundamental del Estado, se garantice por lo menos la realización del núcleo esencial de la autonomía en las entidades territoriales, protegiendo y respetando el derecho que ellas tienen de regular los que se han denominado sus propios y particulares intereses”. (Se subraya)

En el mismo sentido, y frente a la concurrencia de funciones y competencias de los distintos niveles del Estado, el Alto tribunal expresó:

“La elaboración de la ley por parte del legislador debe apoyarse en una interpretación sistemática de los preceptos de la Constitución, de manera tal que las normas que produzca conduzcan a la realización plena de todas y cada una de sus disposiciones, pues el contenido de unas no puede superponerse o excluir el contenido de otras; en el caso que se analiza se trata de normas superiores concurrentes, que se complementan, y que como tales, para efectos de su realización material, deben armonizarse, pues unas, las de los artículos 79, 80 y 334 de la C.P., le atribuyen al Estado obligaciones que éste debe ejercer a través del legislador, y otras las del artículo 313 superior le atribuyen a los municipios la potestad reglamentaria sobre las mismas; se trata entonces de que el Estado, a través del legislador, cumpla con la expedición de una regulación de carácter integral que no interfiera ni impida el desarrollo de la facultad reglamentaria que el Constituyente le reconoció a los municipios, para lo cual deberá evitar extender su actividad normativa al punto de vaciar la competencia de los municipios, y que éstos asuman la facultad reglamentaria en la perspectiva de que ésta recae y afecta bienes que constituyen un patrimonio nacional, que como tal debe aprovecharse utilizarse imponiendo los intereses nacionales y regionales sobre los estrictamente locales” (Sentencia C-534 de 1996).

Hechas estas precisiones sobre el alcance del artículo 61 de la Ley 99 de 1993, es pertinente señalar que el Distrito Capital de Bogotá ha venido adoptando diversas decisiones que se inscriben dentro del marco de dicha norma. En efecto, el artículo en mención declara como bienes ambientales protegidos de la Sabana de Bogotá a los páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos, lo cual ha sido recogido e integrado en el Decreto Distrital 555 de 2021 —y en sus posteriores desarrollos— mediante el cual se adoptó la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá.

Dentro del marco de este instrumento de planificación, se han definido políticas de largo plazo en materia de ordenamiento territorial, de las cuales vale la pena destacar:

“Artículo 3. Políticas de largo plazo del ordenamiento territorial del Distrito Capital. Con el fin de responder a los desafíos identificados se definen las siguientes políticas del ordenamiento territorial de largo plazo del Distrito Capital:

1. Política Ambiental y de Protección de Recursos Naturales. Se orienta a establecer las medidas para la protección del ambiente, la conservación y manejo de los recursos naturales en el Distrito Capital. Tiene como eje ordenador la Estructura Ecológica Principal y busca la protección de los paisajes

bogotanos, para mejorar la calidad vida de sus habitantes, así como la calidad de los ecosistemas urbanos y rurales.

Esta política se desarrolla por medio de estrategias orientadas a consolidar el sistema hídrico, fortalecer el objeto y función de los ecosistemas de los bordes rural – urbano, implementar estrategias de conectividad y complementariedad de los ecosistemas como articuladores con su entorno regional y la protección del Río Bogotá

...

5. Política de ocupación, aprovechamiento y manejo del suelo. Se orienta a incluir las medidas y lineamientos urbanísticos que controlan la ocupación del suelo destinado al desarrollo urbano y de los asentamientos rurales, evitando su expansión sobre los suelos de vocación rural o de importancia ambiental y propendiendo por el desarrollo sostenible del territorio Distrital.

Tiene como objetivo lograr un aprovechamiento óptimo y eficiente del suelo para la ubicación y construcción de equipamientos, en especial los que son de los servicios del cuidado, espacio público y demás soportes urbanos, protección y conservación de elementos de importancia ambiental, desarrollo de proyectos de vivienda VIS y VIP y promoción de nuevas implantaciones económicas generadoras de empleo formal. Lo anterior con el fin de mitigar los déficits históricos y generar condiciones de calidad territorial.

Esta política se concreta en acciones para favorecer la revitalización urbana, cualificación de las áreas consolidadas y el desarrollo de nuevas áreas ejemplares de ciudad promoviendo la permanencia de moradores, unidades productivas y propietarios.

...

10. Política de Integración Regional. Busca consolidar acuerdos regionales para el desarrollo sostenible de la región, mediante arreglos institucionales apropiados y compromisos bilaterales o multilaterales que garanticen oportunidades para todos y todas, así como la aplicación de los principios de buen gobierno y efectividad donde Bogotá se compromete, a partir de lo dispuesto en el presente Plan, a realizar su aporte a través de:

a. La continuidad espacial de los componentes biofísicos, la valoración de elementos de la estructura ecológica principal y su conectividad regional como base de la ocupación sostenible del territorio en la región.

b. La corresponsabilidad del Distrito Capital y las entidades territoriales vecinas en la conservación de la estructura ecológica regional, su integridad ecosistémica, la oferta sostenible de servicios ecosistémicos, su aporte a la resiliencia en el marco de gestión y adaptación al cambio climático y la mejora de la calidad del aire.

c. La importancia en la regulación, suministro y calidad del recurso hídrico para el desarrollo sostenible del Distrito y la región, a través de la incorporación en el ordenamiento territorial de los lineamientos establecidos por los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas – POMCAS, con jurisdicción en el Distrito Capital.

d. El desarrollo de infraestructuras, equipamientos y redes subregionales de prestación de servicios y la gestión asociada para ampliar su alcance de manera desconcentrada y promoción de un esquema polifuncional de atracción de actividades humanas.

e. Un criterio de equidad, para atender demandas regionales de conectividad, servicios públicos, sistema de cuidado, entre otras, en el marco de la solidaridad, el cual implica la coordinación y gestión conjunta de recursos de Bogotá y la Región.

f. La construcción conjunta e implementación de instrumentos de planeación, gestión y financiación de escala metropolitana y regional para el desarrollo de proyectos de interés regional, vivienda VIS y VIP y nodos de equipamientos.

g. La construcción de un esquema de gobernanza regional multinivel, participativo y de gobierno abierto.

A través de esta política, sus estrategias y proyectos se da continuidad a los acuerdos y procesos cumplidos en instancias de coordinación y planeación entre Bogotá, los departamentos de la Región Central y los municipios circunvecinos en diferentes escenarios, como son los convenios bilaterales, el Comité de Integración Territorial (CIT) y la Región Administrativa de Planeación Especial (RAP-E). En el futuro, se proyecta un adecuado diseño institucional de gobernanza con la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, creada mediante Acto Legislativo [02](#) de 2020 y las normas que la desarrollen, modifiquen o sustituyan”.

En relación con la minería en el Distrito Capital, se estableció lo siguiente:

“Artículo 36. Actividad minera en el Distrito Capital. Las actividades mineras en el Distrito Capital solamente podrán desarrollarse en las zonas compatibles con la minería determinadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco de lo dispuesto por el artículo [61](#) de la Ley [99](#) de 1993 o la norma que lo modifique o sustituya, como uso condicionado sujeto al cumplimiento de las licencias, permisos o autorizaciones que exija la normativa en la materia, así como lo dispuesto en el presente Plan.

Las actividades mineras promoverán y garantizarán la conservación, recuperación, restauración, uso y aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios ambientales de dichas zonas, buscando articulaciones comunitarias y sectoriales que permitan la ejecución de proyectos coordinados, concertados y cofinanciados para asegurar el cierre minero atendiendo el impacto ambiental y social de dichas zonas.

Los titulares mineros que se encuentren al interior de las zonas compatibles con la minería deberán garantizar el cierre, recuperación y restauración ambiental de la actividad extractiva, a través de los instrumentos de control y manejo ambiental que otorguen las diferentes autoridades con competencia en la materia.

Las autoridades ambientales incorporarán en los instrumentos ambientales de la actividad minera de las zonas compatibles, obligaciones tendientes a garantizar su cierre, recuperación y restauración, para que las mismas se adecúen a otros usos para proyectos asociados a la Estructura Funcional y del Cuidado y a la ejecución de actuaciones urbanísticas.

Las Autoridades Ambientales incorporarán dentro de la evaluación y seguimiento de las Licencias Ambientales y los Planes de Manejo Ambiental para el desarrollo de la actividad minera en las zonas compatibles con la minería determinadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la exclusión y restricción de actividades de aquellas zonas que se traslapen con polígonos de la Estructura Ecológica Principal.

...”

“Artículo 38. Recuperación del suelo afectado por minería por fuera de las zonas compatibles. Los predios afectados por actividades mineras por fuera de las zonas compatibles con la minería determinadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco del artículo 61 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique o sustituya, deberán garantizar siempre el cierre, recuperación y restauración ambiental de la actividad extractiva a través de los Planes de Manejo, Recuperación y Restauración Ambiental (PMRRA) que impongan las diferentes autoridades ambientales con competencia en la materia.

Los predios afectados por actividades mineras descritas en el presente artículo podrán ser recuperados, restaurados y conservados por proyectos públicos o privados coordinados, concertados y cofinanciados con el fin de lograr el cierre ambiental y social de dichas zonas.

En dichos predios una vez la autoridad ambiental apruebe la culminación del cumplimiento de las actividades de cierre, recuperación y restauración ambiental, se podrán realizar proyectos asociados a cualquiera de las Estructuras Territoriales.

Parágrafo. Los particulares que pretendan desarrollar actividades forestales y silviculturales en suelo rural podrán recuperar áreas afectadas por la actividad minera, previa celebración de un acuerdo de recuperación y conservación con los propietarios de los predios, bajo la responsabilidad de las partes involucradas en el mismo.

Las autoridades competentes expedirán lineamientos generales que permitan generar un marco jurídico para la materialización de dichas actividades de recuperación y conservación.”

En relación con la Estructura Ecológica Principal, el Decreto 555 de 2021 establece:

“Artículo 41. Definición de la Estructura Ecológica Principal - EEP. La Estructura Ecológica Principal es ordenadora del territorio y garante de los equilibrios ecosistémicos para un modelo de ocupación en clave de sostenibilidad ambiental regional. Esta estructura está constituida por el conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos ecológicos esenciales del territorio, cuya finalidad principal es la preservación, conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, los cuales brindan la capacidad de soporte para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones. Se configura a partir de la integración de las áreas de origen natural y antrópico, las cuales mantienen una oferta ambiental significativa para sus habitantes y de otras formas de vida de la ciudad y la región.

La Estructura Ecológica Principal está conformada por cuatro (4) componentes con categorías y elementos, así:

COMPONENTE	CATEGORÍA	ELEMENTO	INSTRUMENTO DE MANEJO
Áreas Protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SINAP	Áreas protegidas públicas del orden nacional	Parque Nacional Sumapaz	Plan de Manejo Ambiental
		Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá	Plan de Manejo Ambiental
	Áreas protegidas privadas del orden nacional	Reservas Naturales de la Sociedad Civil	Plan de Manejo Ambiental
Zonas de Conservación	Áreas de conservación in situ	Reserva Forestal Protectora Productora	Plan de Manejo Ambiental

		de la Cuenca Alta del Río Bogotá	
		Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen	Plan de Manejo Ambiental
		Paisajes Sostenibles	N/A
		Parques Distritales Ecológicos de Montaña	Plan de Manejo Ambiental
Áreas de Especial Importancia Ecosistémica	Áreas protegidas del orden Distrital	Reservas Distritales de Humedal	Plan de Manejo Ambiental
	Páramos	Corredor de Páramos Cruz Verde- Sumapaz	Plan de Manejo Ambiental
	Sistema hídrico	Cuerpos hídricos naturales	N/A
		Cuerpos hídricos artificiales	N/A
Áreas Complementarias para la Conservación	Parques Contemplativos y de la Red Estructurante que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal y Parques de Borde	Parques Contemplativos y de la Red Estructurante que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal	N/A
		Parques de Borde	No aplica, salvo para el Área de Ocupación Público Prioritaria que cuenta con un Plan de Manejo
	Subzona de importancia ambiental de los POMCA	Áreas provenientes de la subzona de importancia ambiental del POMCA Río Bogotá	POMCA
	Áreas de resiliencia climática y protección por riesgo	Áreas de Resiliencia Climática y protección por riesgo	N/A

Además de establecer los componentes de la Estructura Ecológica Principal, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) define el régimen de usos del suelo para cada una de las categorías que la conforman:

- **Sobre las áreas de especial importancia ecosistémica:**

“Artículo 58. Componente de Áreas de Especial Importancia Ecosistémica. Las áreas de especial importancia ecosistémica contribuyen a la regulación del ciclo hidrológico a través de la conservación de los depósitos y flujos naturales del agua superficial y subterránea. En este componente se ubican las categorías de páramo y el sistema hídrico que incluyen el Complejo de Páramos Cruz Verde – Sumapaz y los cuerpos hídricos naturales y artificiales”.

“Artículo 59. Complejo de Páramos Cruz Verde - Sumapaz. En virtud de su importancia ambiental y los servicios ecosistémicos que presta este ecosistema, constituye suelo de protección de la Estructura Ecológica Principal, en concordancia con lo dispuesto en la Ley [1930](#) de 2018 y el Decreto Único Reglamentario [1077](#) de 2015 o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan.

Su delimitación corresponde a la contenida en la Resolución [1434](#) de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la norma que la modifique o sustituya.

Parágrafo 1. El régimen de usos del Complejo de Páramos Cruz Verde - Sumapaz delimitado que se superpone con otros elementos de la Estructura Ecológica Principal correspondientes a las categorías de Parque Nacional Natural, Parques Naturales Regionales y Reservas Forestales Protectoras, será el establecido en el Plan de Manejo Ambiental del respectivo elemento.

Parágrafo 2. Los usos para las áreas del Complejo de Páramos Cruz Verde - Sumapaz delimitado que no se superponen con otros elementos de la Estructura Ecológica Principal con Plan de Manejo Ambiental adoptado en los términos del parágrafo anterior, se rigen conforme a lo definido en la Ley [1930](#) de 2018 y el Acuerdo [16](#) de 1998 de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) o la normas que las modifiquen o sustituyan. Hasta tanto se formule y adopte el Plan de Manejo Ambiental de estos ecosistemas por parte de las autoridades ambientales competentes, conforme a la Resolución [886](#) de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la norma que modifique o sustituya, se aplicará el siguiente régimen de usos:

Usos principales	Usos compatibles	Usos condicionados	Usos prohibidos
Conservación Restauración: Restauración de ecosistemas, recuperación de ecosistemas, rehabilitación de ecosistemas.	Conocimiento: Educación ambiental, investigación y monitoreo. Sostenible: Actividades de contemplación, observación y conservación.	Restauración: Obras para el mantenimiento, adaptación y recuperación de las funciones ecosistémicas – caudales. Sostenible: Agroecología bajo los lineamientos de la Resolución 886 de 2018 Aprovechamiento de productos secundarios del bosque.	Todas las actividades que no se encuentran en los usos principales, compatibles o condicionados

- **En relación con el Sistema hídrico:**

“Artículo 60. Sistema hídrico. El sistema hídrico del Distrito Capital es una categoría del componente de áreas de especial importancia ecosistémica de la Estructura Ecológica Principal, el cual está compuesto por los cuerpos y corrientes hídricas naturales y artificiales y sus áreas de ronda, los cuales son:

1. Nacimientos de agua y sus rondas hídricas.
2. Ríos y quebradas y sus rondas hídricas.
3. Lagos y lagunas.
4. Humedales y sus rondas hídricas.

5. Áreas de recarga de acuíferos.

6. Cuerpos hídricos naturales canalizados y sus rondas hídricas.

7. Canales artificiales.

8. Embalses.

9. Vallados...”

Sobre las áreas complementarias para la conservación:

“Artículo 66. Áreas Complementarias para la Conservación. Son los espacios que a partir de las condiciones biofísicas actuales, presentan parches de vegetación o relictos de ecosistemas naturales que aportan a la conectividad estructural y/o funcional ambiental y además ofrecen el soporte cultural, físico, ecológico y paisajístico al Distrito Capital, dotándolo de valores urbanísticos, estéticos, ambientales, organizativos y sensoriales.

Este componente se encuentra conformado por los Parques Contemplativos y de la Red Estructurante que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal, los Parques de borde, las Áreas de resiliencia climática y protección por riesgo y la Subzona de manejo y uso de importancia ambiental del POMCA del Río Bogotá que se encuentran en el Mapa CG-3.2.5 “Áreas complementarias para la conservación”.

“Artículo 67. Parques contemplativos y de la Red Estructurante que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal y Parques de Borde. Son las áreas destinadas a las actividades de disfrute ambiental y conservación y actividades recreativas y deportivas al interior del suelo urbano y rural, las cuales deben mantener la funcionalidad y la conectividad ecológica de la Estructura Ecológica Principal. Los parques de la red estructurante que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal son todos los que en el anexo “Inventario de Espacio Público Peatonal y Para el Encuentro” se señalan como metropolitanos y los zonales con tipología contemplativa.

Categoría	Elemento			Declaratoria	Instrumento	Responsable de la administración
Parques contemplativos y de la Red Estructurante que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal y Parques de Borde	Parques contemplativos y de la red estructurante que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal			POT	Proyecto específico	IDRD
	Parques de borde	Red de parques del Río Bogotá	Parque lineal del río Bogotá	Acuerdo CAR 37 de 2018	Acuerdo CAR 37 de 2018	CAR
			Áreas complementarias para la adaptación al cambio climático	POT	Proyecto específico	SDA -IDRD
		Parque de Borde de los Cerros Orientales		Resolución 463 de 2005 y Decreto Distrital 485 de 2015	Plan de Manejo - Decreto 485 de 2015	IDRD (SDA)

		Parque de borde de Cerro Seco	POT	Proyecto específico	IDRD (SDA, SDE)	IDPC,
--	--	-------------------------------	-----	---------------------	-----------------	-------

Parágrafo. La reglamentación de los Parques Contemplativos y parques de la red estructurante que hacen parte la estructura ecológica principal es la definida en la Sección del Sistema de Espacio Público Peatonal y para el Encuentro del Componente Urbano del presente Plan”.

“Artículo 68. Parques de Borde. Son espacios abiertos que se localizan en los bordes urbanos y se configuran como espacios de transición y articulación entre los ambientes urbanos con áreas rurales y otros componentes de la Estructura Ecológica Principal. Los lineamientos para el diseño y construcción de los parques de borde se incorporarán en el Manual de Espacio Público a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación conforme a lo señalado en el componente urbano del presente Plan.

Se trata de espacios continuos o discontinuos, que tienen como objetivo generar una transición y articulación espacial de los tejidos urbanos del borde con las dinámicas rurales, y están destinados a aportar al mantenimiento de la integridad ecológica de los ecosistemas colindantes.

Se encuentran conformados por:

1. Red de Parques del Río Bogotá. Es una franja multifuncional de transición espacial para el uso y disfrute público en la cual se encuentran valores ecosistémicos y paisajísticos con fines recreativos, culturales, educativos, paisajísticos, de investigación, de valoración de la naturaleza y de prestación de servicios públicos, que posibilita intervenciones dirigidas a la puesta en valor del entorno natural y paisajístico del río, a su custodia, cuidado, turismo ecológico y movilidad en modos no motorizados. Así mismo, es una estrategia de adaptación al cambio climático basada en ecosistemas.

La Red de Parques del Río Bogotá está conformada por el Parque Lineal del Río Bogotá y las Áreas complementarias para la adaptación al cambio climático:

a. Parque Lineal del Río Bogotá. La Red de Parques del Río Bogotá acoge el proyecto de Parque Lineal del Río Bogotá creado mediante el Acuerdo 37 de 2018 de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, cuyo objetivo es consolidar la estrategia de recuperación y descontaminación del Río Bogotá y desarrollar un instrumento para dar cumplimiento a la Sentencia A.P. 90479-01 del Consejo de Estado.

La administración y gestión del Parque Lineal del Río Bogotá en el suelo rural y de expansión urbana está a cargo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. El Distrito Capital determinará las entidades distritales encargadas de la administración y gestión de los asuntos de su competencia en relación con la ejecución de proyectos en la Red de Parques del Río Bogotá, sin perjuicio de las competencias de las autoridades ambientales.

b. Áreas complementarias para la adaptación al cambio climático. Están compuestas por una franja diferenciada por tramos discontinuos paralela al cauce que se encuentra entre los tejidos urbanos de borde y el Parque Lineal del Río Bogotá. Sus vocaciones funcionales estarán caracterizadas, en parte, por el territorio circundante de cada uno de los tramos, con énfasis en la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático, la rehabilitación ecológica y paisajística, la conectividad ecosistémica, la recreación y la localización de equipamientos.

Las áreas pueden estar asociadas, en relación de contigüidad, continuidad o superposición a humedales, cuerpos de agua, canales, áreas rurales, parques urbanos y regionales, infraestructuras de servicios, así como equipamientos públicos y privados.

La administración y gestión de las áreas complementarias para la adaptación al cambio climático está a cargo de la Secretaría Distrital de Ambiente, en coordinación con el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte -IDRD y los sectores vinculados a los equipamientos públicos y privados que allí se ubiquen.

2. Parque de Borde de los Cerros Orientales. *Corresponde al Área de Ocupación Público - Prioritaria de la Franja de Adecuación de los Cerros Orientales establecida en la Resolución 463 de 2005 del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial que será destinada a la conservación, al uso público, a actividades recreativas y a actividades de contemplación, observación y conservación, de conformidad con lo ordenado por la sentencia del Consejo de Estado del 5 de noviembre de 2013 (Ref.: 250002325000200500662 03). Adicionalmente, este Parque cumplirá con la función amortiguadora para el manejo y protección de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.*

El régimen de usos del Parque de Borde de los Cerros Orientales es el establecido por el Decreto Distrital [485](#) de 2015 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

La administración y gestión de estas áreas está a cargo del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDRD, bajo los lineamientos de la Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de sus competencias.

3. Parque de Borde de Cerro Seco. *Es un área de importancia ambiental, cultural y recreativa, con alto valor simbólico para la comunidad, con oportunidades para brindar espacio público al entorno. Las decisiones que se tomen dentro de este parque deben ser armónicas con las dinámicas ambientales de la zona, articulando los instrumentos de cierre minero con los objetivos de conservación de las áreas de valor ambiental.*

La administración y gestión del Parque de Borde de Cerro Seco está a cargo del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte – IDRD, con el apoyo del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC, Secretaría Distrital de Ambiente, el DADEP y la Secretaría de Desarrollo Económico, en el marco de sus competencias”.

“Artículo 69. Zonificación de los parques de borde. Los parques de borde tienen la zonificación definida en el presente artículo, a partir de la cual se asigna un régimen de usos acorde con la realidad territorial e importancia ambiental de cada zona y se identifican en el Mapa CG-3.2.6 “Zonificación de Parques de Borde”:

1. Articulación urbana y restablecimiento: *Son zonas orientadas a robustecer la integración espacial y funcional entre los tejidos urbanos y los espacios abiertos en las áreas del borde urbano, mediante la localización de equipamientos y espacio público. Así mismo, pueden ser áreas que actualmente cuentan con determinadas zonas ocupadas y/o edificadas, cuya función ecosistémica, recreativa, deportiva, dotacional, de conocimiento y paisajística puede ser restablecida.*

2. Áreas de uso, goce y disfrute: *Constituyen zonas enfocadas a la restauración, rehabilitación y recuperación ecosistémica, así como al conocimiento, en donde pueden realizarse actividades de contemplación, observación, conservación y recreativas.*

3. Áreas de conservación y restauración: Son zonas cuya vocación principal es la conservación, restauración, rehabilitación y recuperación de los ecosistemas y hábitat naturales en conjunción con actividades de disfrute ambiental y conocimiento.

El régimen de usos aplicables a los parques de Bordo es el siguiente:

Zona Articulación Urbana y Restablecimiento			
Usos principales:	Usos compatibles:	Usos condicionados:	Usos prohibidos:
Dotacional Conocimiento: Educación ambiental, investigación y monitoreo	Sostenible: Actividad de contemplación, observación y conservación.	Sostenible: Ecoturismo, agricultura urbana y periurbana, actividades recreativas y actividades deportivas y puntos de la tierra.	Todas las actividades que no se encuentran en los usos principales, compatibles o condicionados.
Zona Áreas de uso, goce y disfrute			
Usos principales:	Usos compatibles:	Usos condicionados:	Usos prohibidos:
Conservación Restauración: Restauración de ecosistemas, recuperación de ecosistemas y rehabilitación de ecosistemas. Conocimiento: Educación ambiental, investigación y monitoreo.	Sostenible: Agricultura urbana y periurbana	Restauración: Medidas de reducción del Riesgo y obras para el mantenimiento, adaptación y recuperación de las funciones ecosistémicas – caudales. Sostenible: Ecoturismo, viverismo, actividades de contemplación, observación y conservación, actividades recreativas y actividades relacionadas con la prestación de servicios públicos.	Todas las actividades que no se encuentran en los usos principales, compatibles o condicionados.
Zona Áreas de Conservación y Restauración			
Usos principales:	Usos compatibles:	Usos condicionados:	Usos prohibidos:
Conservación Restauración: Restauración de ecosistemas, recuperación de ecosistemas, rehabilitación de ecosistemas.	Conocimiento: Educación ambiental, investigación y monitoreo.	Restauración: Medidas de reducción del Riesgo y obras para el mantenimiento, adaptación y recuperación de las funciones ecosistémicas – caudales. Sostenible: Ecoturismo, agricultura urbana y periurbana y actividad de contemplación, observación y conservación.	Todas las actividades que no se encuentran en los usos principales, compatibles o condicionados.

Parágrafo 1. Los usos dotacionales se someterán para su desarrollo e implantación a las disposiciones establecidas en el artículo “Equipamientos en la Zona de Articulación y Restablecimiento de la red de parques del río Bogotá” del presente Plan.

Parágrafo 2. La anterior zonificación no aplica al Parque de Borde de los Cerros Orientales, correspondiente al Área de Ocupación Pública Prioritaria de la Franja de Adecuación, el cual se rige por lo establecido en el Decreto Distrital [485](#) de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya.

Parágrafo 3. Podrán declararse nuevos parques de borde que serán incorporados a la Estructura Ecológica Principal a través de acto administrativo de la Secretaría Distrital de Planeación, previo concepto de la Secretaría Distrital de Ambiente”.

De esta manera, se evidencia que Bogotá tiene previsto dentro de su Plan de Ordenamiento Territorial la debida reglamentación de los usos del suelo, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política, el artículo 61 de la Ley 99 de 1993 y demás normatividad.

- 5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó en firme la decisión que echó para atrás el proceso de elaboración de la resolución “Lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá”. Sin embargo, por favor explique por qué el distrito los consideró inconvenientes, y qué propuesta alternativa tiene.**

Para abordar la primera parte de la pregunta relativa a los inconvenientes identificados por el Distrito respecto del proyecto de Resolución, se desarrollará un análisis bajo dos ejes fundamentales: el déficit participativo en su proceso de formulación y los cuestionamientos relativos a su legalidad y compatibilidad con el ordenamiento jurídico colombiano.

- **Falta de coordinación Interinstitucional con el Distrito Capital y los municipios que conforman la Sabana de Bogotá y su compatibilidad con el ordenamiento jurídico colombiano**, en especial, con los principios de coordinación interinstitucional y concurrencia de competencias en materia de gestión ambiental y ordenamiento territorial.
- **El déficit participativo en la formulación de la resolución**, lo que plantea interrogantes sobre el cumplimiento del derecho a la participación en asuntos ambientales, tanto en el orden interno como en el marco de los compromisos internacionales asumidos por Colombia.

1.1. El principio de coordinación interinstitucional y su incumplimiento en el proceso de formulación.

La Constitución Política de Colombia establece que la gestión ambiental y territorial debe regirse por los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, de manera que ninguna entidad pueda actuar unilateralmente en la adopción de medidas con impacto sobre el ordenamiento del territorio.

El artículo 288 de la Constitución Política establece que la gestión de las competencias en materia ambiental y territorial debe realizarse de manera coordinada entre la Nación y las entidades territoriales.

Este mandato ha sido desarrollado en normas como:

- **Ley 99 de 1993:** Dispone que la gestión ambiental es una función pública compartida entre la Nación y los entes territoriales.
- **Ley 388 de 1997** (artículo 10): Determina que la adopción de determinantes ambientales debe realizarse en coordinarse con los municipios y distritos.
- **Ley 489 de 1997** (artículo 6): Establece que la función administrativa debe regirse por el principio de coordinación, asegurando la armonización de competencias entre entidades nacionales y territoriales.
- **Ley 2294 de 2023** (artículo 32).

Para el Consejo de Estado “la existencia de competencias concurrentes entre distintas autoridades del Estado, impone que su ejercicio se haga de manera armónica, de modo que la acción de los distintos órganos resulte complementaria y conducente al logro de los fines de la acción estatal”, es decir que, la confluencia de atribuciones entre varias entidades estatales no deriva en su exclusión, sino que exige que su ejecución se lleve a cabo mancomunadamente. (Consejo de Estado fallo del treinta (30) de agosto de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 11001-03-15-000-2017-02829-01(AC).

Pese a lo anterior, el proceso de formulación de la resolución no ha sido conforme con la normativa ambiental nacional ni con los compromisos internacionales adquiridos por Colombia, pues ha desconocido el derecho de participación efectiva, ha vulnerado el principio de coordinación interinstitucional y ha impedido el acceso oportuno a la información ambiental, en abierta contradicción con el Acuerdo de Escazú y la jurisprudencia constitucional.

Habida consideración de lo anterior, desde el Distrito Capital siempre se ha solicitado al Gobierno Nacional la articulación y coordinación que se requiere legalmente para la expedición de actos administrativos tan relevantes como son los lineamientos ambientales para la Sabana de Bogotá.

2. La construcción de la resolución no fue participativa y la supuesta consulta ciudadana fue solo un requisito legal, no un verdadero proceso colectivo

El proceso de formulación de la Resolución por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) ha evidenciado serias falencias en cuanto a la participación efectiva y la coordinación interinstitucional, en contravención de los principios constitucionales, legales y convencionales que rigen la planificación ambiental y territorial en Colombia.

Si bien diversas dependencias del Distrito participaron en reuniones convocadas por el Ministerio, es importante destacar que dichas reuniones no constituyeron un procedimiento de construcción colectiva, como lo exige la Constitución Política (CP), la Ley 99 de 1993, la Ley 388 de 1997 y el Acuerdo de Escazú, pues dichos espacios se limitaron a la socialización de la actuación administrativa unilateral que venía desarrollando dicha Cartera ministerial.

2.1. Deficiencias estructurales en el proceso de formulación de la resolución

En el desarrollo de este proceso normativo, se han identificado fallas sustanciales que desvirtúan su carácter participativo y coordinado requerido para la expedición de actos administrativos de esta naturaleza:

- a. **Presentación del documento como un producto terminado:** En los espacios convocados por el MADS no se presentó el documento que estaba en construcción. El proyecto de resolución fue presentado como una decisión cerrada, sin margen de modificación sustancial ni posibilidad de una revisión detallada por parte de las entidades territoriales, pues únicamente se conoció su contenido cuando fue publicado en la página del Ministerio para comentarios.
- b. **Ausencia de insumos técnicos detallados:** A pesar de la importancia de la regulación en cuestión, no se entregaron cartografías, bases de datos, ni propuestas de regulación concretas que permitieran a la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) realizar observaciones técnicas fundamentadas.
- c. **Falta de un articulado y coordinación preliminar:** En ninguna de las reuniones sostenidas con la Secretaría Distrital de Ambiente se presentó un borrador de articulado para discusión previa, impidiendo así un análisis sustantivo de la norma antes de su publicación para comentarios.
- d. **Respuestas contradictorias del MADS a derechos de petición:**
 - o En respuesta a un derecho de petición elevado por la Secretaría Distrital de Ambiente, el MADS informó que la resolución aún estaba en construcción.
 - o Sin embargo, al día siguiente, el documento fue publicado para comentarios, evidenciando que el proceso de consulta ciudadana fue concebido como un trámite meramente formal y no como un mecanismo de construcción participativa real.
- e. **Falta de consulta con comunidades potencialmente afectadas:** No hay evidencia de que el proceso de formulación haya incluido instancias de diálogo con comunidades locales, actores productivos o sectores directamente afectados, en contravención de lo establecido en el Acuerdo de Escazú y la jurisprudencia constitucional.

2.2. El deber de garantizar la participación efectiva en decisiones ambientales

La participación en la toma de decisiones ambientales no puede reducirse a una simple consulta formal posterior a la construcción del acto administrativo. Por el contrario, la Constitución y la jurisprudencia constitucional han señalado que la participación debe ser previa, sustantiva y efectiva, garantizando a los actores involucrados el acceso oportuno a la información y la posibilidad real de incidir en la decisión final.

En la Sentencia T-361 de 2017, la Corte Constitucional enfatizó que la participación ciudadana en asuntos ambientales debe ser previa, amplia, deliberada, consciente, responsable y eficaz. Esto implica que las autoridades están obligadas a garantizar condiciones que permitan la intervención de los distintos actores en igualdad de oportunidades.

La participación no se limita a la simple socialización o información, sino que requiere la construcción de un consenso razonado para resolver conflictos o crisis ambientales. Además, las autoridades

deben abrir espacios de diálogo efectivo y significativo con la población, buscando su consentimiento libre e informado. El acto administrativo resultante debe evidenciar que se evaluaron las razones de la comunidad y que se motivó cualquier apartamiento de las opiniones o juicios de la colectividad.

En el mismo sentido, el Acuerdo de Escazú, adoptado en Colombia mediante la Ley 2273 de 2022, impone a las autoridades ambientales el deber de garantizar que los procesos de participación sean oportunos, incluyentes y sustantivos.

Su artículo 7 establece que los Estados deben:

- Asegurar que la participación se dé en las primeras etapas del proceso de toma de decisiones.
- Garantizar el acceso a la información necesaria para una deliberación real.
- Proveer mecanismos de consulta efectivos y accesibles a todos los sectores afectados.

El proceso liderado por el MADS no cumplió con estos estándares, pues se limitó a presentar avances sin permitir una intervención temprana, sustancial e informada de la Secretaría Distrital de Ambiente y demás entidades territoriales.

7 ¿Qué medidas va a implementar el Distrito para garantizar el acceso al agua en el largo plazo? Enumérelas y explíquelas.

Durante periodo 2024 II-2027, se viene implementando el Proyecto de Inversión 8086 – “*Incremento de las acciones que contribuyen a la adaptación de los socio-ecosistemas de Bogotá Región ante los fenómenos de variabilidad y cambio climático Bogotá D.C.*”. Este proyecto contempla, entre otras, la actividad de implementación de acuerdos de conservación en áreas que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal y otras zonas de especial importancia ecosistémica de la Bogotá Región, incluyendo la figura de los acuerdos de pago por servicios ambientales (PSA).

Los acuerdos de conservación se constituyen como instrumentos orientados a reconocer, mediante un incentivo económico, a propietarios, poseedores y ocupantes que adelanten acciones de preservación o restauración en predios ubicados en zonas estratégicas para el abastecimiento hídrico de Bogotá D.C., conforme a lo establecido en las Resoluciones 2332 de 2018 y 3922 de 2022, expedidas por la Secretaría Distrital de Ambiente.

La vegetación característica de los ecosistemas de páramo y bosque altoandino, predominante en las áreas clave para el abastecimiento hídrico de la ciudad, juega un papel fundamental en la provisión y regulación del recurso hídrico. En consecuencia, los acuerdos de conservación con componente de PSA contemplan medidas específicas de restauración ecológica y preservación, contribuyendo así a garantizar la disponibilidad.

La tasa de crecimiento en los ecosistemas de páramo es baja, debido a que está limitada por la presión y cambios diarios extremos de la temperatura entre otros factores. Esto hace que los procesos de restauración en estos ecosistemas sean lentos y que no alcancen a recuperar la estructura y composición en el corto plazo, por lo que la restauración tendrá un impacto en el largo plazo.

Por otra parte, la expansión de la frontera agropecuaria en los ecosistemas de alta montaña como el páramo y el bosque altoandino está agudizando los conflictos socioambientales alrededor del agua, situación que es exacerbada por su alta vulnerabilidad al cambio climático. En tal sentido, la implementación de incentivos dirigidos a mantener la cobertura natural en estos ecosistemas ha sido una de las acciones prioritarias.

En la actualidad, a fin de implementar incentivos de pago por servicios ambientales, se viene avanzando en el proceso contractual para la suscripción de un convenio de asociación con el objeto de *“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos jurídicos y financieros en la gestión de acciones que permitan a la entidad la ejecución del programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) en las áreas de importancia estratégica para el Distrito Capital, en el marco de la conservación de recursos hídricos”*,.

Dentro de este contexto, se realizó la gestión de vigencias futuras ante la Secretaría Distrital de Planeación quien aprobó la solicitud y se adelantan los estudios necesarios para iniciar el proceso de convocatoria a las ESAL posiblemente interesadas en el tema.

De igual manera, se viene acompañando la ejecución del Convenio de Asociación 2022-2019 suscrito entre la Secretaría Distrital de Ambiente, la Secretaría de Bienestar Verde de la Gobernación de Cundinamarca, y la Fundación Alianza Biocuenca que tiene por objeto *“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la implementación de proyectos de Pago por Servicios Ambientales – PSA para la conservación de áreas ambientalmente estratégicas para el suministro de agua de Bogotá y el Departamento de Cundinamarca en zonas influencia del Páramo de Chingaza y el Embalse de Tominé”*.

En el marco de este Convenio se ha avanzado en la implementación de 12 acuerdos colectivos de conservación mediante el pago por servicios ambientales – PSA, sobre un área de 3.706,8 ha, contribuyendo de esta manera a la regulación del ciclo hidrológico en doce microcuencas de los municipios de Guatavita, Guasca, La Calera, Fómeque, y Sesquilé, que se localizan en áreas de especial importancia para el abastecimiento hídrico de Bogotá D.C.

La firma de estos acuerdos refuerza el compromiso de Bogotá y Cundinamarca con la protección de los ecosistemas que garantizan la disponibilidad de agua. Además, el Distrito busca fortalecer la resiliencia ambiental de la región frente a los efectos del cambio climático, buscando asegurar la provisión sostenible de este recurso para el futuro.

La colaboración entre entidades públicas y privadas, así como la participación de las comunidades locales, es un paso significativo hacia la gestión integral de los recursos naturales, consolidando un modelo de desarrollo que prioriza el bienestar ambiental y la seguridad hídrica.

Adicionalmente, la Secretaría Distrital de Ambiente y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá suscribieron el Convenio Interadministrativo 1240 el 21 de julio de 2017, el cual tiene como objeto *“Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para adelantar los procesos de adquisición, mantenimiento y administración de los predios requeridos para la protección y conservación de los recursos hídricos que surten de agua al Acueducto Distrital, en cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, reglamentado por el Decreto*

0953 de 2013, compilado este último en el título 9 Instrumentos Financieros, Económicos y Tributarios, capítulo 8, Adquisición y Mantenimiento de Predios y la financiación de esquemas de pago por servicios ambientales en áreas estratégicas que surten de agua a los acueductos, del Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”.

Las áreas por adquirir, conservar, mantener y administrar son aquellas que estén ubicadas dentro y fuera del perímetro de la ciudad de Bogotá, de acuerdo con las actas y planos suscritos por las autoridades ambientales respectivas y el Consejo Estratégico de la Cuenca, según sea el caso.

En este sentido, se han previsto en el marco del convenio la gestión predial en las siguientes Áreas de Importancia Estratégica: Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, El Páramo de Sumapaz, El Parque Natural Chingaza, Parque Ecológico de Montaña Entrenubes, El Corredor Ecológico de Ronda del Río Tunjuelo, El Corredor Ecológico de Ronda del Río Fucha y El Corredor Ecológico de Ronda de la Quebrada Chiguaza.

En desarrollo del convenio y conforme con las obligaciones definidas para cada una de las partes, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá adelanta, en nombre de la Secretaría Distrital de Ambiente, todos los procesos de adquisición de los predios priorizados en las zonas delimitadas de importancia estratégica para la protección y conservación del recurso hídrico.

Dichos procesos de adquisición se realizan conforme a lo dispuesto en las Leyes 9 de 1989, 388 de 1997, 142 de 1992 y demás normas vigentes y aplicables a la adquisición predial por motivos de utilidad pública e interés social. Al respecto, corresponde aclarar que, si bien la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá adelanta el proceso de adquisición de los predios, así como su administración y mantenimiento, el titular del derecho de dominio de los mismos es la Secretaría Distrital de Ambiente.

Los recursos destinados para la ejecución de los proyectos y cumplimiento de metas por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente tendrán como fuente de financiación el 1% de los ingresos corrientes del Distrito Capital, es decir, la misma fuente de financiación del citado convenio prevista en el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011 y el Decreto Reglamentario 953 de 2013.

Esto de conformidad con la orden No. 4.25 de la sentencia el Consejo de Estado AP-25000-25-27-000-2001-90479-01, el Departamento de Cundinamarca, el Distrito Capital y a los entes territoriales que hacen parte de la cuenca del Río Bogotá deberán apropiarse de manera inmediata un porcentaje no menor al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de dichas zonas o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales

Con la expedición de la Ley 2320 del 29 de agosto de 2023 “*Por medio de la cual se modifica la Ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones*”, se modificó el artículo 111 permitiendo adicional a la adquisición predial para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales, distritales y regionales, la inversión en soluciones basadas en la Naturaleza (SbN), adaptación al cambio climático, restauración, rehabilitación y recuperación ecológica, o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales (PSA) en las referidas áreas de importancia estratégica

Producto de la gestión realizada entre los años 2017 a 2024, se han priorizado 774 predios con un área aproximada de 16.604,37 hectáreas, de los cuales se han adquirido 181 predios con un área aproximada de 2.654,19 hectáreas.

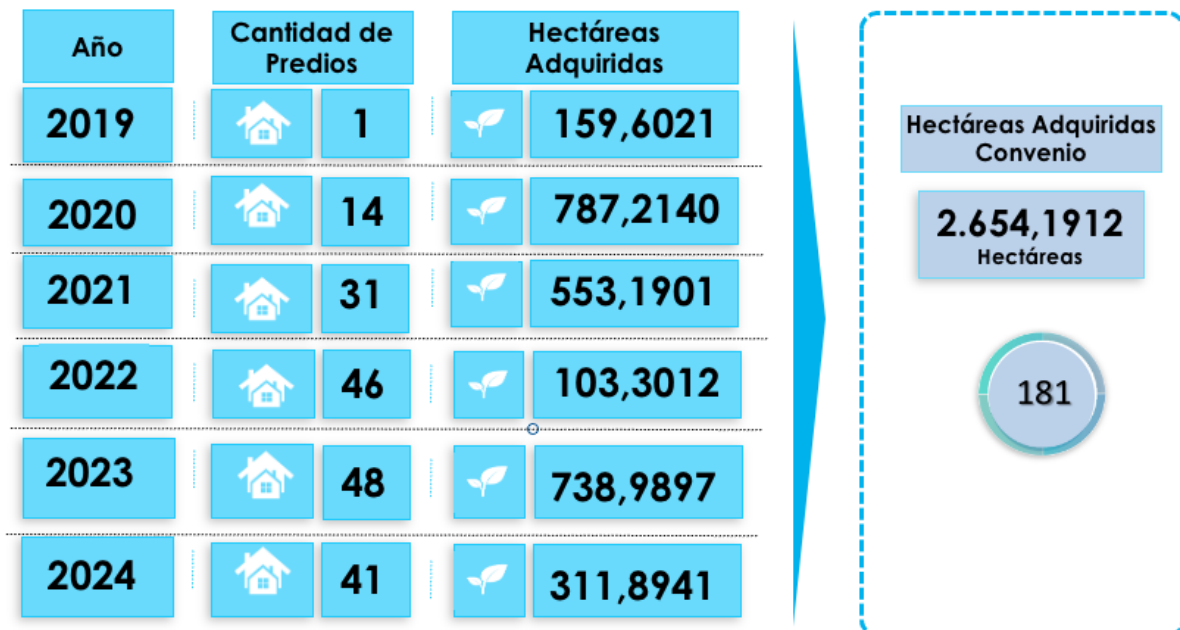


Imagen 1. Predios adquiridos por año en el Convenio 1240 de 2017 con corte a Diciembre de 2024.
Fuente: EAAB

Con esta gestión, liderada por el Distrito Capital a través de la Secretaría Distrital de Ambiente, se busca garantizar el suministro de agua para los habitantes de Bogotá en el corto, mediano y largo plazo, mediante la adquisición y conservación de zonas de importancia estratégica para la regulación hídrica.

De esta forma damos respuesta concreta, de fondo y definitiva a la petición trasladada a esta Secretaría, sin perjuicio de que en el evento que requiera información adicional estaremos prestos a proporcionarla.

Atentamente,



CLAUDIA PATRICIA GALVIS SANCHEZ
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE(E)

Proyectó:

JHON WILLAN MARMOL MONCAYO

Fecha de ejecución: 11-04-2025

Revisó:

JORGE LUIS GOMEZ CURE

Fecha de ejecución: 14-04-2025

Proyectó:

JAVIER CIFUENTES ALVAREZ

Fecha de ejecución: 11-04-2025

Revisó:

IVAN DARIO MELO CUELLAR
LUZ MARINA VILLAMARÍN RIAÑO

Fecha de ejecución: 11-04-2025

Fecha de ejecución: 11-04-2025

Aprobó:

EDGAR EMILIO RODRIGUEZ BASTIDAS

Fecha de ejecución: 11-04-2025

Proyectó:

JHON WILLAN MARMOL MONCAYO

Fecha de ejecución: 14-04-2025

Revisó

MAGALY FERNANDA PAJOY VILLA
CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR

Fecha de ejecución: 14-04-2025

Fecha de ejecución: 14-04-2025

Firmó: